

# Estrategia país: Sudán

2025-2028



Fundación  
Mainel

solidaridad y cultura transformadoras



Aprobada el 30 de junio de 2025

## ÍNDICE

Contexto Africano.....	2
Sudán.....	2
Geografía.....	3
Política.....	4
Economía.....	6
Sociedad.....	8
Educación.....	10
Cultura.....	11
Salud.....	12
Estrategia.....	14
Objetivos generales.....	14
Líneas de actuación prioritarias.....	14
Socios locales.....	15
Instrumentos de seguimiento y evaluación.....	16

## Contexto Africano

África es un continente marcado por una gran diversidad cultural y lingüística, con una población joven que representa tanto una oportunidad como un desafío. La urbanización avanza rápidamente, provocando transformaciones sociales profundas y una creciente tensión sobre las infraestructuras urbanas. Al mismo tiempo, amplios sectores de la población siguen viviendo en condiciones de pobreza y con acceso limitado a servicios básicos como la educación y la salud. Las desigualdades estructurales persisten entre diferentes grupos sociales.

En el ámbito educativo y cultural, se observa un esfuerzo por preservar las identidades tradicionales frente a la expansión de modelos educativos estandarizados y procesos de globalización cultural. La falta de infraestructura adecuada en las ciudades limita el acceso equitativo a servicios básicos como la salud y la educación formal adecuada. A ello se suman los efectos del cambio climático, la inestabilidad política en algunas regiones y la dependencia económica de sectores informales. En este contexto, las iniciativas educativas, de cultura y de salud desempeñan un papel clave en la promoción de la cohesión social, el empoderamiento local y la reducción de las desigualdades.

## Sudán

Sudán, ubicado en el noreste de África, fue según la División de Estadísticas de las Naciones Unidas el país más extenso del continente desde su independencia en 1956 hasta la secesión de Sudán del Sur en 2011. A lo largo de su historia reciente ha estado marcado por conflictos armados internos, muchos de ellos con un trasfondo étnico o religioso, que han causado un sufrimiento prolongado a la población civil, frecuentemente convertida en blanco directo de la violencia.

Lejos de ser una situación superada, el país enfrenta desde abril de 2023 una guerra civil a gran escala entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). El conflicto, calificado en marzo de 2025 por la directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia como “la crisis humanitaria más grande y devastadora del mundo”, ha dejado a millones de personas en situación extrema de vulnerabilidad, desplazamiento forzado, fuga de cerebros y acceso limitado a servicios básicos que está llevado a una crisis sanitaria de gran escala (OMS, 2024).

Informes de Amnistía Internacional documentan violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de ambos bandos, en un entorno marcado por una corrupción estructural y

falta de transparencia institucional. En 2024, Sudán ocupaba el puesto 170 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y, en 2025, el puesto 156 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa según Reporteros Sin Fronteras. Todo ello hace de Sudán un país opaco del cual para obtener información sea común tener que recurrir a estudios de organismos internacionales.

## Geografía

Actualmente Sudán es el tercer país más grande de África con una superficie de aproximadamente 1,88 millones de km<sup>2</sup>. Está situado en el noreste del continente y limita con Egipto al norte, el mar Rojo al noreste, Eritrea y Etiopía al este, Sudán del Sur al sur, la República Centroafricana al suroeste, Chad al oeste y Libia al noroeste. Esta posición geográfica le otorga una gran diversidad paisajística y estratégica en la región del Sahel y el Cuerno de África.

El territorio sudanés está dominado por llanuras y mesetas áridas, atravesadas por el río Nilo y sus principales afluentes, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que se unen en la capital, Jartum. El Nilo constituye el eje hidrográfico y humano del país, siendo vital para la agricultura y la vida cotidiana. El clima es predominantemente árido y semiárido, con zonas desérticas en el norte (Desierto del Sahara) y sabanas en el sur. La desertificación y la degradación ambiental son desafíos importantes que afectan tanto a la población como a los servicios básicos, especialmente en contextos de conflicto como el que se vive actualmente.

En este sentido, cabe destacar que la guerra ha tenido un efecto catastrófico para la economía sudanesa. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2023 aproximadamente dos tercios de la población se dedicaban a la agricultura, pero el conflicto ha obligado a millones de agricultores a abandonar sus tierras. También ha disparado el precio de los suministros. Ahora todo, desde los fertilizantes hasta la gasolina, es mucho más caro y, como resultado, muchos no pueden permitirse comprar alimentos.

Esta destrucción y abandono de las áreas agrícolas se suma a una situación ya de por sí grave debido al cambio climático. El aumento de las sequías desde los años ochenta ha hecho disminuir el número de tierras aptas para la agricultura y ha aumentado la rivalidad entre agricultores y ganaderos por la gestión del agua, especialmente en las regiones del suroeste.

En lo político el país se encuentra dividido en 18 estados. El único estado con salida al mar es el Estado del Mar Rojo cuya capital, Puerto Sudán, constituye un enclave vital para el país. Su ubicación dentro de una de las mayores rutas comerciales del mundo lo convierte en la principal vía para el comercio exterior y la entrada de ayuda humanitaria. Además, debido a su ubicación alejada de los puntos más fuertes del conflicto, esta ciudad viene sirviendo actualmente como

capital provisional de las fuerzas gubernamentales y como punto de reubicación de instituciones educativas y sanitarias que a la fecha atienden a más población que se desplaza al puerto.

En conclusión, la ubicación geográfica de Sudán, su riqueza hidrográfica concentrada en torno al Nilo, y su diversidad climática hacen del país un territorio estratégicamente crucial pero profundamente vulnerable frente a crisis ambientales y conflictos armados. La guerra ha agravado una situación precaria, provocando el colapso de servicios básicos y del sistema agrícola lo cual compromete la seguridad alimentaria de millones de personas. Sin embargo, comprender plenamente los desafíos que enfrenta Sudán requiere de un análisis de su evolución política en los últimos tiempos.

## Política

Sudán ha sido testigo de una historia marcada por profundas divisiones étnicas, conflictos armados prolongados y una lucha constante por el control del poder. Desde que obtuvo su independencia del Reino Unido y Egipto en 1956, el país ha vivido múltiples guerras civiles, golpes de Estado y episodios de violencia que han moldeado profundamente su panorama político y social. La herencia colonial dejó un Estado sin cohesión interna, dividido entre un norte mayoritariamente árabe-musulmán y un sur africano con creencias cristianas y animistas. Estas diferencias culturales, religiosas y socioeconómicas fueron rápidamente politizadas por las élites del norte, que comenzaron a concentrar el poder político y los recursos económicos, marginando al sur y a otras regiones periféricas.

El primer gran conflicto estalló incluso antes de la independencia formal cuando la unificación administrativa reactivó tensiones, especialmente en el sur, donde se temía ser relegado por el poder central de la capital, Jartum. Esta percepción de exclusión y la imposición de una identidad árabe-islámica fueron factores clave que desencadenaron la Primera Guerra Civil Sudanesa, iniciada en 1955 y que se extendería hasta 1972. Fue en esencia una lucha por la autonomía regional frente a un centro que intentaba consolidar un modelo unitario de Estado.

El acuerdo de paz firmado en Addis Abeba en 1972 puso fin al conflicto al conceder cierto grado de autonomía al sur. No obstante, las tensiones permanecieron latentes debido al incumplimiento de varios aspectos del acuerdo entre ellos los referentes a la explotación de yacimientos petrolíferos. Finalmente, en 1983 el presidente Jaafar Nimeiri abolió la autonomía del sur y declaró la ley islámica en todo el país, lo que desató un nuevo conflicto conocido como la Segunda Guerra Civil Sudanesa.

Este nuevo conflicto, que se extendió hasta 2005, fue aún más devastador que el primero. Se calcula que murieron más de dos millones de personas y otros cuatro millones fueron desplazados. La guerra finalizó con los Acuerdos de Paz de Naivasha que establecieron un alto el

fuego, autonomía reforzada para el sur, reparto de los ingresos petroleros y la celebración de un referéndum de independencia seis años después que dió como resultado la secesión de Sudán del Sur en 2011.

A la vez que transcurría la Segunda Guerra Civil Sudanesa el país estaba siendo transformado bajo el liderazgo de Omar al-Bashir, quien llegó al poder en 1989 mediante un golpe de Estado. Su gobierno, respaldado por islamistas, profundizó la islamización del Estado y reprimió violentamente a la oposición. En su mandato se intensificó el autoritarismo, la corrupción y la militarización del aparato estatal.

Uno de los episodios más oscuros de su régimen fue el conflicto en Darfur, que comenzó en 2003, cuando grupos rebeldes de la región occidental acusaron al gobierno de Jartum de marginación política y económica. La respuesta del Estado fue brutal: financió y armó a milicias árabes conocidas como janjaweed, que perpetraron masacres, violaciones y desplazamientos forzados. Se estima que más de 300.000 personas murieron y 2.5 millones fueron desplazadas. La comunidad internacional calificó estos actos como genocidio y, en 2009, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente Omar al-Bashir por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, aún no ha sido detenido por dichos cargos.

Durante la década de 2010, Sudán enfrentó una crisis económica severa, agravada por la pérdida de ingresos petroleros tras la secesión del sur y las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. El descontento popular se incrementó progresivamente, y en diciembre de 2018 estallaron protestas masivas a raíz del aumento del precio del pan y del combustible. Estas manifestaciones, lideradas en gran parte por jóvenes, mujeres y organizaciones civiles, evolucionaron en un movimiento nacional que exigía la salida de Bashir. En abril de 2019, tras meses de presión popular y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, Bashir fue depuesto por un golpe militar.

El golpe de estado dió paso a un frágil proceso de transición democrática. Se estableció un gobierno civil-militar de transición encabezado por el primer ministro Abdalla Hamdok y el general Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano. Sin embargo, la coexistencia entre militares y civiles resultó problemática. Aunque inicialmente hubo avances, como la firma de acuerdos de paz con grupos rebeldes y el levantamiento de sanciones internacionales, las tensiones entre ambas facciones persistieron. En octubre de 2021, los militares, liderados por Burhan, disolvieron el gobierno de transición en un nuevo golpe de Estado, lo que desató nuevas protestas y una ola de represión que minó aún más la ya débil confianza en el proceso político.

La situación se deterioró aún más en abril de 2023, cuando estalló un conflicto armado abierto entre dos facciones militares rivales: las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lideradas por el general

Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia comandada por el general Mohamed Hamdan Dagalo. Ambos líderes habían sido aliados durante el gobierno de transición, pero las diferencias sobre cómo integrar a las RSF en el ejército regular y sobre el rumbo de la transición derivaron en una lucha por el poder. El conflicto estalló en Jartum, la capital, y rápidamente se extendió a otras regiones del país, como Darfur, Kordofán y el este.

La guerra ha tenido consecuencias catastróficas para la población civil. Según las Naciones Unidas en 2025, tras dos años de conflicto, miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas tanto interna como externamente, huyendo a países vecinos como Chad, Egipto y Sudán del Sur o regiones relativamente más seguras como el Estado del Mar Rojo. Es en la capital de este estado, Port Sudán, donde se ha ubicado de forma temporal la capital, además también se ha establecido como punto principal de entrada de la ayuda humanitaria y es donde más refugiados son acogidos. No obstante, en abril de 2025 la ciudad fue bombardeada incrementando la ya nefasta situación en la ciudad y aumentando los problemas en el suministro de ayuda humanitaria en todo el país.

Las condiciones humanitarias son extremas: hospitales destruidos, escasez de alimentos, falta de agua potable y un colapso total de los servicios básicos. Las partes en conflicto han sido acusadas de cometer atrocidades, incluyendo asesinatos indiscriminados, violencia sexual y saqueos masivos. La coordinadora humanitaria de la ONU en el país, Clementine Nkweta-Salamin condenó la supuesta utilización de mujeres y niños como escudos humanos, así como la obstrucción de la ayuda humanitaria y la detención de civiles, incluidos niños. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de mediación por parte de la Unión Africana, las Naciones Unidas y potencias regionales como Egipto y Arabia Saudita, los combates no han cesado y no se vislumbra un acuerdo de paz cercano.

El conflicto también ha provocado una fragmentación del poder estatal. En muchas áreas, el control del gobierno central ha desaparecido y grupos armados locales, tribus y milicias han ocupado el vacío de poder. En regiones como Darfur, el conflicto actual ha reavivado las antiguas tensiones étnicas, resultando en episodios de violencia que recuerdan los peores momentos de la guerra de los años 2000. La lucha entre las SAF y las RSF no solo es una disputa entre dos hombres fuertes, sino el reflejo de una lucha estructural más amplia por el poder, la riqueza y la identidad nacional en un país marcado por décadas de exclusión, autoritarismo y militarización.

A pesar de la trágica situación actual, existen aún sectores de la sociedad civil sudanesa que mantienen viva la esperanza de una transición democrática. La comunidad internacional, por su parte, enfrenta el desafío de cómo apoyar a la población civil sin legitimar a los actores armados. En resumen, Sudán atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. El conflicto actual no solo ha devastado físicamente al país, sino que también ha socavado los

frágiles avances hacia una gobernanza inclusiva. Resolver esta crisis requerirá no solo el cese inmediato de las hostilidades, sino una profunda reestructuración del Estado sudanés, que garantice representación equitativa, justicia para las víctimas y una transición genuina hacia la democracia que sepa respetar las diversas culturas de su país.

## Economía

La situación económica de Sudán ha sufrido un colapso drástico a raíz del conflicto armado iniciado en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Antes del estallido de la guerra, el Banco Mundial estimaba el Producto Interno Bruto (PIB) del país en aproximadamente 109.000 millones de dólares. Sin embargo, la guerra ha interrumpido gravemente las cadenas de suministro, el comercio y los servicios básicos, provocando una contracción económica severa.

Uno de los efectos más visibles ha sido la inflación galopante, impulsada por la escasez de alimentos, combustible y bienes básicos, así como por la devaluación de la libra sudanesa. La inflación ha afectado transversalmente a todos los sectores productivos, elevando el coste de vida y erosionando el poder adquisitivo de la población, especialmente en áreas urbanas como Puerto Sudán que, según el Displacement Tracking Matrix (DTM) de noviembre de 2024, ha absorbido gran parte de la población desplazada de otras regiones.

La deuda externa sigue siendo una carga significativa, superando los 56.000 millones de dólares, con gran parte de ella en situación de impago desde los años 90. Aunque existían esfuerzos internacionales para aliviar esta deuda bajo la iniciativa HIPC (Países Pobres Muy Endeudados), el conflicto ha paralizado estos avances, dejando al país en una situación de asfixia financiera sin acceso a financiamiento multilateral o bilaterales tradicionales.

La economía sudanesa se sostiene principalmente sobre recursos naturales, destacando la producción agrícola, la extracción de petróleo, la extracción de oro (una de las principales fuentes de divisas), y las remesas enviadas por la diáspora sudanesa. Sin embargo, el comercio internacional del país está condicionado al Canal de Suez ya que este representa un 34 % de sus importaciones y exportaciones, lo que lo hace vulnerable a interrupciones en esta ruta marítima estratégica. A nivel diplomático, actores como China, Emiratos Árabes Unidos y Rusia han aumentado su influencia. Este último país, como destaca el capitán de navío Abel Romero Junquera en su libro *La crisis del mar Rojo. Análisis desde una dimensión marítima*, busca establecer una base militar en Port Sudán, lo que subraya la importancia geopolítica del puerto y aumenta la complejidad del escenario internacional y la militarización del entorno.

El aumento del gasto militar, impulsado por la competencia entre las SAF y las RSF, ha venido a costa del gasto social y también de todo el trabajo previo que venía impulsándose en el sector de la innovación al desarrollo por parte de las autoridades locales, sobre todo en Puerto Sudán. La mayoría de los fondos públicos se destinan ahora al financiamiento de armamento y del conflicto en general, dejando sectores como salud, educación y servicios sociales prácticamente desfinanciados. En este contexto, la atención sanitaria y los cuidados paliativos están completamente desatendidos, particularmente en zonas costeras como Puerto Sudán, donde se han refugiado cientos de miles de desplazados internos.

En aspectos más concretos la guerra impide obtener información precisa. Sin embargo, según el informe elaborado por el PNUD en noviembre de 2024 titulado “El impacto socioeconómico del conflicto armado en los hogares urbanos sudaneses”, se puede visibilizar que la mayoría de la población activa se ha desplazado hacia la economía informal, caracterizada por trabajos precarios, inestabilidad y ausencia de protección social. Asimismo, se ha registrado un repunte del trabajo infantil, sobre todo en actividades agrícolas, venta ambulante y minería artesanal, como estrategia de supervivencia ante la pérdida de ingresos familiares. Y en el caso de la población activa con alguna profesión, se viene incrementado la migración de estos profesionales hacia fuera del país, lo que muchos sociólogos indican como fuga de cerebros.

En cuanto a ingresos y distribución de la renta, el conflicto ha profundizado las desigualdades estructurales existentes. La población rural y los sectores más vulnerables han quedado completamente excluidos de la economía formal, lo que incrementa su dependencia de la ayuda humanitaria.

Según la OIT en 2022 el 45,9% de las mujeres trabajaba en el sector agrícola frente a un 36,6% de los hombres que participaban en este sector. Esto ha dejado a las mujeres en una situación crítica ya que la agricultura ha sido uno de los sectores más golpeados por la guerra siendo objetivo constante de ataques y saqueos. Por otro lado, este mismo organismo afirmaba que, antes del estallido del conflicto, en el sector industrial trabajaban un 12,8% de los hombres respecto a sólo un 2,6% de las mujeres. Esto teniendo en cuenta el conflicto implica que los porcentajes pueden ser aún menores lo que implicaría la práctica desaparición de las mujeres del sector industrial. Además, sobre el empleo de las mujeres en sectores clave como la salud, los últimos informes realizados antes del Conflicto ya reportaban una muy baja representatividad de las mujeres dentro de este sector. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) indicaba que menos del 2% del empleo femenino se encontraba en el sector salud (2017).

En definitiva, el conflicto ha venido a dañar una economía de por sí ya débil. Sudán es una economía dominada por un sector agrícola extremadamente dañado y un comercio exterior considerablemente dependiente del Canal de Suez. Es difícil obtener datos precisos de la situación

actual pero, como han señalado en 2025 actores como UNICEF y ACNUR, ha habido un claro deterioro en las condiciones económicas del pueblo sudanes.

## Sociedad

La sociedad sudanesa atraviesa un momento crítico, marcado por el deterioro profundo de las condiciones de vida como consecuencia directa del conflicto armado iniciado en abril de 2023, que ha aumentado las desigualdades históricas y ha debilitado aún más las estructuras sociales y comunitarias. Sudán, con una población estimada de 50 millones de personas, ocupaba en 2023 el puesto 176 de 193 países en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Sudán, con un valor de 0,511, se sitúa en la categoría de desarrollo humano bajo. Esta cifra representa un estancamiento e incluso una leve disminución en comparación con los años anteriores, lo que refleja el impacto del primer año de conflicto, el deterioro institucional y el retroceso en los derechos y el bienestar de la población.

Una de las dimensiones más alarmantes del desarrollo humano en Sudán es la desigualdad de género. Ese mismo año el IDH ajustado por género mostraba una diferencia significativa: en los hombres tiene un valor de 0,542 frente al 0,441 para las mujeres. Esto implica una pérdida del 35,81 % del IDH debido a la desigualdad, reduciéndolo a 0,328. En términos del Índice de Desigualdad de Género (IDG), que mide las disparidades en salud reproductiva, empoderamiento y participación económica, Sudán presenta un valor de 0,588, ubicándose en el puesto 158 de 172 países evaluados y dentro del Grupo 5, el más desfavorecido.

Estas desigualdades se expresan no sólo entre géneros, sino también entre clases sociales, niveles educativos, regiones geográficas y grupos étnicos. Las mujeres, los hogares rurales, las minorías étnicas y las personas con menor nivel de educación enfrentan barreras mucho mayores para acceder a servicios esenciales, oportunidades económicas y participación en la vida pública. La fragmentación territorial y social ha sido una característica persistente en la historia reciente de Sudán, y el conflicto actual ha profundizado aún más estas divisiones.

El acceso a recursos básicos ha sido severamente afectado desde el inicio del conflicto. Según datos recientes del PNUD y otras agencias internacionales, la disponibilidad y calidad de servicios fundamentales como agua potable, saneamiento, electricidad, alimentación, educación y salud ha disminuido de forma drástica, especialmente en áreas urbanas que han recibido grandes flujos de población desplazada.

Se estima que más del 70 % de los desplazados internos han buscado refugio en otras ciudades dentro del propio país, ejerciendo una presión enorme sobre unos servicios urbanos ya deteriorados. Port Sudán, en el Estado del Mar Rojo, ha sido la principal receptora de refugiados

debido a su importancia económica y situarse lejos de las zonas de conflicto. Sin embargo, una parte de los refugiados, especialmente aquellos con un mayor nivel educativo o adquisitivo, han abandonado el país. Esta situación de “fuga de cerebros” viene a agravar las condiciones de vida en el país ante la carencia de médicos, maestros, ingenieros, etc.

Estos empleos no sólo son imprescindibles para cualquier país sino que lo son aún más ante el deterioro de las condiciones de vida que supone el conflicto. Este deterioro lo podemos ver en el informe elaborado por el PNUD en noviembre de 2024 titulado “El impacto socioeconómico del conflicto armado en los hogares urbanos sudaneses”. En este informe podemos ver que el acceso al agua potable en zonas urbanas ha registrado una caída superior a 20 puntos porcentuales en el suministro de agua por red. A ello se suma que la fiabilidad del servicio eléctrico se ha visto gravemente comprometida: casi el 90 % de los hogares que anteriormente contaban con electricidad informan interrupciones severas o pérdida total del servicio. Esta interrupción de servicios esenciales agrava la vulnerabilidad de las poblaciones urbanas y pone de manifiesto la necesidad urgente de rehabilitación de infraestructuras críticas como condición previa para cualquier esfuerzo de recuperación sostenible.

Sin embargo, uno de los problemas más graves que atraviesa el país es la inseguridad alimentaria. El conflicto ha ocasionado un descenso importante de la producción agrícola lo que sumado a los cortes en las vías de suministro ha provocado graves problemas a la población para acceder a los alimentos. Según las Naciones Unidas a principios de 2025 más de 24,6 millones de personas en todo Sudán, más de la mitad de la población, sufren actualmente altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Esto incluye 8,1 millones en condiciones de emergencia y al menos 638.000 personas en condiciones de catástrofe.

De este modo, queda claro que Sudán atraviesa una crisis profunda y prolongada. A una situación ya precaria se ha sumado un conflicto devastador cuyo desenlace aún se vislumbra distante. La pobreza y la inseguridad se han intensificado, afectando gravemente a una población que, en su mayoría, carece de acceso a servicios básicos como la educación y la salud, debido al grave deterioro de las infraestructuras provocado por la guerra.

## Educación

El sistema educativo también ha sufrido un retroceso dramático. Según el informe del PNUD mencionado anteriormente, el 88 % de los hogares urbanos con niños en edad escolar reporta que al menos uno ha dejado de asistir a la escuela desde el inicio del conflicto. Más grave aún, en el 63,6 % de los casos, todos los niños y jóvenes en edad escolar del hogar han abandonado por completo la educación.

Este corte abrupto del proceso educativo tendrá efectos a largo plazo sobre la cohesión social, el capital humano y las oportunidades de futuro para toda una generación. Según el informe humanitario de UNICEF en marzo de 2025 se estimaba que más de 13.000 escuelas en todo el país permanecen cerradas, mientras que casi 2.900 escuelas están actualmente sirviendo como refugio para personas desplazadas internamente. Sumado a esto, muchas escuelas, especialmente instituciones de educación superior, se han tenido que trasladar a ciudades más seguras para poder continuar con su actividad.

De esta forma, miles de personas carecen de acceso a la educación debido al conflicto. Además, especialmente en la educación superior siguen existiendo barreras de tipo económico que repercuten en el acceso a la educación y el tipo de educación que reciben. Por un lado, muchos jóvenes no pueden pagar las tasas de acceso o los desplazamientos dejando la educación superior únicamente para aquellos hombres más privilegiados económicamente. Por otro lado, el apartado práctico de la educación es también el que más recursos económicos requiere para poder adquirir los materiales. De esta forma, las personas con menos recursos carecen de acceso a la educación o solo pueden permitirse una de menor calidad. Esta situación dificulta al país reemplazar la mano de obra cualificada que ha huido o ha muerto a raíz del conflicto. También impide en gran medida el progreso de los grupos menos favorecidos creando así una barrera permanente.

Dentro de estos grupos menos favorecidos destaca la grave situación de las mujeres. Sudán es un país profundamente desigual y esto se plasma también en su sistema educativo. Según el informe "Índice de riesgos para la educación" de 2022 de Save the Children, Sudán era el segundo país del mundo, sólo superado por Afganistán, en riesgos para la educación de las niñas.

Toda esta situación de limitaciones en el acceso, falta de personas con estudios superiores y falta de infraestructuras educativas es especialmente grave en un país en el que, según el Banco Mundial, el Índice de Capital Humano en 2020 era de 0,4. Este índice mide el potencial económico que una persona puede alcanzar en función de las condiciones de salud y educación en su país de origen siendo 1 el máximo. Es decir, que la guerra ha venido a dañar una situación de por sí ya nefasta.

En definitiva, el conflicto en Sudán no solo ha generado una crisis humanitaria inmediata, sino que también ha profundizado las desigualdades estructurales y ha puesto en grave riesgo el futuro del país al debilitar aún más su ya frágil sistema educativo. La combinación de cierres masivos de escuelas, desplazamientos, barreras económicas y desigualdades de género compromete el desarrollo del capital humano y perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión. Sin una intervención urgente, coordinada y sostenible, existe un alto riesgo de que se pierda toda una generación, con consecuencias irreversibles para la reconstrucción social y económica del país.

## Cultura

La historia reciente de Sudán refleja con claridad cómo los conflictos armados no solo han sido una constante en el país, sino que han estado profundamente atravesados por factores étnicos, religiosos y culturales. Desde la independencia de Sudán del Sur en 2011, se estima que el 97% de la población sudanesa profesa el islam sunita, aunque existen minorías cristianas y comunidades musulmanas que siguen distintas interpretaciones del islam.

Sin embargo, a pesar de esta relativa homogeneidad religiosa en Sudán existen una gran cantidad de etnias y culturas. Esta pluralidad cultural a menudo ha sido foco de conflictos ante el centralismo de la capital y la incapacidad de las instituciones de gestionar la diversidad étnica. Ejemplo de esto son las dos guerras civiles sudanesas o el conflicto de Darfur, en estos conflictos el poder central trató de imponerse por la fuerza a las regiones periféricas sin respetar su identidad y autonomía.

Otro ejemplo lo tenemos en Port Sudán. Allí el gobierno para aumentar sus apoyos decidió contratar como personal sanitario a miembros de la etnia Beya, grupo con gran presencia en esa región, sin importar que estos tuvieran la adecuada formación. Esta situación ha provocado la pérdida de vidas humanas debido a las continuas negligencias. Además, gran parte de este nuevo personal sanitario no ha completado el certificado de finalización de la escuela secundaria y, por lo tanto, no pueden optar a títulos universitarios.

Más allá de estas prácticas que muestran la mala gestión intercultural por parte de las instituciones es necesario comprender la importancia de la cultura en aspectos tan importantes como la salud. En este sentido cabe destacar la existencia de la medicina tradicional sudanesa, la cual tiene un largo recorrido en el país y en la actualidad está constituida por sanadores tradicionales. Estos son personas que practican la medicina basándose en la herencia, la experiencia, el conocimiento y la vivencia subjetiva. Si bien sus métodos no son comparables con la medicina moderna muchas veces son aquellos a los que la población acude, ya sea por raíces culturales o por no poder acceder a nada más.

En este orden, la tradición también tiene un gran peso en la gestión del dolor por parte de los sudaneses. Las interpretaciones sobre el significado del dolor o la enfermedad son diversas: castigo por los pecados cometidos, forma de redención o parte inevitable de la vida. En cualquier caso, estas visiones a veces repercuten en el bienestar de las personas que tratan de asumir el dolor en vez de buscar formas de eliminarlo.

Finalmente, los conflictos armados también suponen un grave riesgo para la cultura. Varios de los museos de la capital han sido saqueados y dañados durante los combates. Más allá de la incalculable pérdida que supone el expolio de estas piezas, algunas de ellas patrimonio de la

humanidad, debemos plantear lo que implica para el país. Estos hechos implican no sólo destruir parte de su pasado sino acabar con herramientas útiles para la unión cultural y el desarrollo educativo.

En conclusión, resulta imprescindible que cualquier estrategia de intervención humanitaria y desarrollo en Sudán incorpore una perspectiva cultural sensible y respetuosa de la diversidad étnica, religiosa y social del país. La cultura no puede ser vista como un elemento secundario, sino como un componente central en la construcción de sistemas de salud más inclusivos, eficaces y sostenibles. Solo así se podrá fortalecer el tejido social, reducir las tensiones históricas y avanzar hacia un modelo de desarrollo realmente equitativo y adaptado a la realidad plural de Sudán.

## Salud

El conflicto armado en Sudán ha ocasionado el colapso de un sistema sanitario que ya de por sí era insuficiente. El sistema de salud, ya frágil y marcado por la falta de inversión, se encuentra ahora en una situación de colapso casi total. Según las Naciones Unidas en abril de 2025 el 80 % de los hospitales en las zonas afectadas por el conflicto estaban fuera de servicio, y a nivel nacional el 75% de los centros de salud ya no están operativos. Según el informe elaborado por el PNUD en noviembre de 2024 titulado “El impacto socioeconómico del conflicto armado en los hogares urbanos sudaneses” sólo uno de cada siete hogares urbanos puede acceder a servicios de salud completos.

Este deterioro ha generado una grave crisis de acceso a servicios esenciales. Según las publicaciones de Naciones Unidas mencionadas anteriormente, la mortalidad materna se ha disparado, y el acceso a la atención sanitaria en general se ve obstaculizado. En abril de 2025 la Dra. Hanan Balkhy, Directora Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, declaró que “Los hospitales se han quedado sin suministros; el personal sanitario está amenazado y la enfermedad se propaga en zonas a las que apenas podemos acceder”. De esta forma, vemos como el escenario de crisis es crítico y se extiende por todo el país.

No obstante, esta crisis sanitaria no afecta a todos de forma uniforme, sino que viene a agravar las desigualdades existentes. Según el Programa de Cirugía Global y Cambio Social (PGSSC) de la Facultad de Medicina de Harvard, en 2022 el 63% de la población se encontraba en riesgo de coste catastrófico en atención quirúrgica, es decir, más de la mitad de la población presentaba problemas para costear una posible intervención quirúrgica. Esta incapacidad para afrontar los costes médicos se habrá agravado durante la guerra ante la escasez de estos y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares desde el inicio.

Más allá de esto podemos ver como los ataques contra instalaciones médicas y personal sanitario se han convertido en una práctica recurrente. Esto fue documentado por ACNUR tras el primer año de conflicto en la región de Darfur dónde al menos 139 estructuras civiles fueron dañadas o saqueadas, entre ellas hospitales, escuelas y puntos de agua comunitarios. Algunos profesionales intentaron continuar su labor en clínicas improvisadas dentro de residencias privadas que han sido blanco de violencia. Todas estas limitaciones vienen dificultando además el seguimiento de casos, diagnóstico oportuno, la atención continua y la adaptación de servicios a las necesidades reales de la población. En todo este contexto, las mujeres y jóvenes desplazadas, las personas con discapacidad y de más bajos recursos enfrentan condiciones mayores de vulnerabilidad. Además, en medio de esta realidad, se encuentran también las personas con enfermedades graves o crónicas que necesitan cuidados paliativos y que históricamente han sido las personas más relegadas en la atención sanitaria de todo el país y al día de hoy en su mayoría son las que tienen menor atención.

En este panorama, Port Sudán emerge como un enclave estratégico para la respuesta sanitaria. Situado en el Estado del Mar Rojo y alejado del epicentro del conflicto, se ha consolidado como el principal punto de entrada de ayuda humanitaria, medicamentos y equipamiento médico. Estos factores han convertido la ciudad en el punto de refugio de cientos de personas tanto de las muchas que ya vivían en el territorio como miles de desplazados por el conflicto, lo cual ha supuesto una gran presión para un sistema sanitario que ya era insuficiente.

No obstante, independientemente de la presión ejercida sobre el sistema sanitario en él ya persistían otros desafíos extremadamente graves. Un gran problema es que una parte importante del personal de salud ha sido contratado sin formación adecuada, como en el caso de los trabajadores de la etnia Beya, lo cual ha derivado en negligencias y grandes riesgos para la salud (Ministerio de Salud del Estado de Mar Rojo). Hasta el momento, dentro del sector sanitario, viene siendo el personal de enfermería el que está en primera línea de la atención y el que viene tratando de guiar a todo el personal no capacitado que está detrás. Además, ya antes del conflicto, el gobierno destacaba que el 70% del personal de salud eran mujeres (2017), lo que en correlación evidencia que las mujeres como personal de salud vienen liderando la carga en medio de esta crisis sanitaria. Toda esta situación, donde se entrelaza la salud y la educación, evidencia la necesidad urgente de fortalecer las capacidades técnicas del personal sanitario local y establecer mecanismos innovadores, claros y equitativos de atención, gestión y formación continua.

En conclusión, la crisis sanitaria en Sudán, profundamente agravada por el conflicto armado, ha desmantelado un sistema ya precario, exponiendo a millones de personas a una crisis. La destrucción de infraestructura, de tecnología paralizada que venía impulsándose previo al conflicto, las restricciones al acceso humanitario, la desigualdad en la atención médica y la falta de personal cualificado configuran un panorama crítico que exige una respuesta integral,

coordinada y sostenida. Frente a este escenario, Port Sudán representa una oportunidad estratégica para articular esfuerzos y alianzas mediante el fortalecimiento del sistema de forma urgente.

## Estrategia

Nuestro trabajo en Sudán dará comienzo con una estrategia conjunta con nuestros socios locales como *Comboni College of Science and Technology (CCST)*, el cual es un centro educativo aprobado por el Ministerio de Universidades e Investigación Científica de Sudán en el 2001. Nuestro socio actualmente se encuentra en la ciudad de Puerto de Sudan en el Estado del Mar Rojo. Es una de las pocas universidades que consigue ofrecer formación en enfermería y cuidados paliativos en todo el país a pesar del conflicto armado, para ello ofrece formación teórica online en todo el país y práctica en la ciudad antes mencionada, donde gracias a su trabajo sostenido brindan atención sanitaria a la población más vulnerable y con menos recursos del territorio.

Otro socio local clave es la Organización Social Bitagdary que es una organización nacional liderada por mujeres, registrada en la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC), que trabaja en los ámbitos de la protección, la salud, la educación, los medios de vida, la asistencia monetaria multipropósito (MPCA), la consolidación de la paz y la cohesión social, y que, a través de sus programas y proyectos, busca apoyar a las comunidades afectadas por crisis y promover el desarrollo sostenible en Sudán desde un enfoque de género e interseccional

Desde Mainel, consideramos la formación y la capacitación del personal sanitario un pilar fundamental para paliar los efectos de la guerra y asegurar el desarrollo futuro del país. Asimismo, consideramos clave el enfoque de género basado en derechos que pueda aplicarse a sectores como la educación y la salud transversalmente.

Esta estrategia se ha definido para un período de 4 años. Durante este período, la zona de trabajo de la Fundación Mainel en Sudán será la ciudad de Port Sudán en el estado del Mar Rojo, sin descartar el trabajo en otras zonas del Estado o el país si se dan las circunstancias. El Estado del Mar Rojo contaba en 2024, según UNICEF, con una población estimada de 1.566.808 de habitantes y acogía a finales de ese mismo año a 278.278 desplazados según la Organización Internacional para las Migraciones. De esta forma, el estado del Mar Rojo representa aproximadamente un 4% de la población del país y en torno a un 12% del territorio que cada día crece más y requiere de más servicios.

## Objetivos generales

En este contexto nuestra intervención se centrará en primer lugar, en ofrecer una educación de calidad, innovadora, equitativa e inclusiva que permita aumentar el número de sudaneses que pueden acceder a un sistema sanitario de calidad. En segundo lugar, y de la mano con lo anterior, se buscará generar sinergias para potenciar la salud de la población con un enfoque equitativo y de innovación. Esto nos permitirá participar en el proceso de construcción de paz, generar oportunidades, sinergias, optimizar procesos y contribuir en el desarrollo de instituciones educativas y sanitarias fuertes.

Igualmente, se contribuirá a la reducción de las desigualdades, la igualdad de género y la creación y/o acceso a trabajos decentes. Todo ello mediante un claro enfoque basado en los Derechos Humanos. De esta forma, la estrategia se enmarca dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con los ODS 3, 4, 5, 8, 10, 16 y 17.

## Líneas de actuación prioritarias

La Fundación Mainel siempre aboga por la solidaridad, la cultura y la educación como herramientas de transformación. Esta estrategia busca empoderar a las personas para que sean las responsables de su propio desarrollo y puedan contribuir a la aplicación efectiva de los Derechos Humanos en su realidad. Por este motivo las líneas de actuación prioritarias son:

- Formación y capacitación para el personal sanitario actual o futuro.
- Formación y capacitación de estudiantes en áreas de salud.
- Formación y capacitación para el personal docente en áreas de salud.
- Aumento de la capacidad y calidad de la atención sanitaria.
- Soluciones innovadoras y sostenibles para el desarrollo de la salud.
- Promoción de la inclusión y reducción de las desigualdades.
- Respeto a las distintas identidades culturales.

Para ejecutar nuestro trabajo en estas líneas de acción, la alineación con las prioridades de los socios locales actuales es fundamental para Mainel. Tal como indica nuestro Plan Estratégico 2025-2028, no buscamos una expansión a través de nuevos socios, sino seguir profundizando en nuestras alianzas existentes. Para ello, conservaremos nuestra política de contacto permanente, conocimiento de sus necesidades, oportunidades, y planificación conjunta.

## Socios locales

La Fundación Mainel trabaja en Sudán con un socio local de máxima confianza. Este proceder permite fortalecer las instituciones locales, mediante el desarrollo de sus recursos humanos y su

capacidad de gestión, así como garantizar la sostenibilidad del proyecto y el predominio de la entidad local en todas las acciones que desarrollamos.

La Fundación Mainel se especializa en la formulación, gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos ante las instituciones donantes. Al mismo tiempo nuestro socio local se dedica a identificar las necesidades, elaborar propuestas de proyectos prioritarios y ejecutar aquellos ya planificados. Nuestros socios locales en Sudán son *Comboni College of Science and Technology (CCST)* y *Organización Social Bitagdary*.

*Comboni College of Science and Technology (CCST)* es un centro educativo y clínica de cuidados paliativos de referencia en el país. Desde 2001 se enfoca en la formación superior de carácter técnico y profesional. Tradicionalmente su sede se ubicaba en la capital del país, Jartum, pero debido al conflicto se ha trasladado a Port Sudán con el fin de poder garantizar un entorno seguro tanto a su personal como a sus estudiantes. La institución se define así misma como "Una comunidad educativa internacional que tiene como objetivo fomentar una sociedad inclusiva en la que cada miembro contribuya al bien común a través de sus habilidades científicas, su compromiso y sus valores personales."

Su enfoque inclusivo y su experiencia en la formación de personal cualificado y atención sanitaria para colectivos vulnerables lo convierten en un socio estratégico para iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema sanitario en Sudán. En el marco de este proyecto, CCST aporta su infraestructura formativa, su red de profesionales locales y su conocimiento profundo del contexto sanitario y educativo del país. Su capacidad para adaptar los programas a las necesidades reales del entorno permite garantizar una formación contextualizada, práctica, alineada con los retos actuales del sistema de salud sudanés y que pueda pervivir a los reveses del conflicto armado.

La Organización Social Bitagdary es una organización nacional liderada por mujeres, registrada en la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC) con el número de registro 106/2024, que trabaja en los ámbitos de protección, salud, educación, seguridad alimentaria y medios de vida, asistencia humanitaria, asistencia en efectivo multipropósito (MPCA), consolidación de la paz y cohesión social, y que, a través de sus programas, busca apoyar a las comunidades afectadas por crisis y promover el desarrollo sostenible en Sudán. Cuenta con un equipo de especialista en enfoque de género e interseccionalidad, que trabajan entrelazando puentes de equidad en medio de la situación real del país, aportando además una visión intercultural del territorio que realza todas las iniciativas que desarrollan en el ámbito de la cooperación y la acción humanitaria.

## Instrumentos de seguimiento y evaluación

La realización de un proyecto no consta sólo de su planificación y ejecución sino que una parte fundamental del mismo es el seguimiento y evaluación que se hace del mismo a lo largo de toda la vida del proyecto. Este proceso es llevado a cabo tanto por la Fundación Mainel como por sus socios locales con el fin de recabar con veracidad toda la información posible.

El objetivo de este seguimiento a corto plazo es garantizar el correcto cumplimiento de las acciones planificadas y, en caso de ser necesario, solventar las incidencias de toda índole que puedan ocurrir durante la ejecución del proyecto. A largo plazo, el seguimiento y la evaluación del proyecto nos permitirá generar aprendizajes que hagan mejorar significativamente nuestras intervenciones.

El seguimiento y medición del impacto de nuestras actividades consta de indicadores cuantitativos básicos y valoraciones cualitativas personales, así como los indicadores propios de cada proyecto y sus respectivas fuentes de verificación.

Del mismo modo, también se recogerán de forma concisa aquellos aspectos que sean claves para la explicación de las situaciones que se han presentado a lo largo de la ejecución de los proyectos, tanto en sentido positivo como negativo. A la hora de dar una opinión y valorar la marcha del proyecto, hay varios aspectos importantes a tratar:

- El concepto de apropiación del proyecto por parte de los titulares de derechos. Esto necesariamente requiere conocer el grado de participación, tanto en el seguimiento como en la ejecución, de las organizaciones locales, colectivos implicados e instituciones que pueden coparticipar en el desarrollo del proyecto. En este apartado se deberá incidir en la eficacia del mecanismo puesto en marcha para la ejecución; capacidad de gestión mostrada por el beneficiario de una subvención, y la eficacia del personal asignado al proyecto.
- Añadir los aspectos más destacables, ya sean positivos o negativos, fortalezas o debilidades, que permitan extraer conclusiones para el futuro. A su vez también se deberá corregir cualquier problema que surja durante la aplicación del proyecto y aplicar cuántos aquellos conceptos que puedan contribuir a mejorar su impacto y resultados.
- En la medida de lo posible se deben sintetizar las recomendaciones prácticas extraídas de la experiencia en la ejecución del proyecto.

En conclusión, el seguimiento y evaluación se harán de forma conjunta con el fin de ofrecer una visión panorámica de todo el proyecto y solventar las posibles incidencias derivadas de su ejecución. Asimismo, cómo ya se ha dicho, se realizarán viajes de seguimiento sobre el terreno para visitar y contribuir a la evaluación de la situación del proyecto. Los gastos en los que se

incurre para realizar este tipo de misiones, generalmente se han previsto en el documento de formulación y deberán estar presupuestados.